

Foja: 1

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 10º Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-5886-2022  
**CARATULADO** : BARRIOS/FISCO DE CHILE - C.D.E.

**Santiago, siete de Diciembre de dos mil veintitrés**

**VISTOS:**

En folio 1, comparecen Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y Eduardo Armando García Ramos, abogados, ambos en representación de **JOSÉ MIGUEL BARRIOS VÁSQUEZ**, profesor de estado con mención en castellano, todos domiciliados en calle Bandera N°236 subterráneo, comuna de Santiago, quienes vienen en interponer demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, todos domiciliados en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago, a objeto de que se condene al demandado a pagar la cantidad de \$200.000.000.-, a su representado, por concepto de daño moral o la suma que este Tribunal determine conforme a derecho, suma que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de la demanda y hasta el pago efectivo, junto con intereses legales correspondientes al mismo período y además las costas de la causa.

Parten por exponer el relato directo de los hechos efectuado por el demandante, quien narra haber sido un joven común y corriente que con 21 años estudiaba pedagogía en castellano en la Universidad Católica. Sin embargo el día 1 de mayo de 1979 fue detenido por Carabineros en medio de un acto cultural de celebración del día del trabajador. Indica que la violencia aplicada por Carabineros fue desmedida pues siendo un evento totalmente pacífico, estos irrumpieron con sus armas. Continúa señalando que cuando intentaba huir fue agarrado por el pelo por unos oficiales que lo subieron a un auto y lo llevaron a la población El Pinar. Allí lo mantuvieron durante un día, durante el cual lo tiraron al suelo y caminaban sobre el pisando con fuerza y riendo. Asimismo lo sometieron a un violento interrogatorio en el que se le golpeó brutalmente. Posteriormente lo llevaron a la primera comisaría de Carabineros, lugar en el que estuvo durante cinco días. Allí lo recibieron nuevamente con brutales golpes e insultos, para luego dejarlo en un pequeño gimnasio junto a otros cuarenta detenidos, completamente hacinados y sin espacio para respirar. Los mantenían con la luz prendida durante toda la noche con el fin de que no pudieran dormir. No le dieron alimento ni agua, tampoco acceso a un baño. Durante todo este tiempo recibió insultos y golpes. Indica



Foja: 1

igualmente que los agentes del estado le rompieron sus lentes por lo que no veía casi nada y comenzó a tener fuertes migrañas.

Continúa explicando que al quinto día separaron a las personas que allí se encontraban y a él lo llevaron a Zapallar. Lugar en el cual fue relegado por 3 meses con obligación de firma dos veces al día. Relata que no tenía donde vivir y dormía en el suelo de una pieza del retén sin nada para abrigarse. Indica que vivía como un indigente y que su padre gastó toda su pensión para poder conseguirle un lugar donde quedarse por lo que quedó hundido en la miseria, lo que hasta el día de hoy lo hace sentir culpable.

Explica que gracias a todo lo antes relatado perdió un año de su carrera y además quedó con muchas secuelas, como un dolor permanente en su costilla debido a que las mismas le fueron fracturadas, sin embargo el daño más grande era el moral, pues quedó emocionalmente destruido, padeciendo hasta la actualidad de estrés postraumático, depresión y crisis de pánico. Aduce que vive alterado y gobernado por el miedo y la angustia, asimismo sufre de pesadillas y terrores nocturnos. También siente terror al ver carabineros transitando por la calle. Expone que el extrapoló todos estos miedos a sus hijos quienes tuvieron una infancia muy dura y deprimente. Agrega que también gracias a lo relatado paso por problemas económicos y por momentos no tuvo como alimentar a su familia.

En cuanto a los argumentos de derecho expone que los hechos relatados por el actor se encuadran en crímenes de lesa humanidad de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945, declaración confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de la Naciones Unidas con fecha 13 de febrero y 11 de diciembre de 1946 y que ha sido actualizado con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada en 1998.

Luego refiere que la responsabilidad del Estado emana del artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, precepto que consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño a una persona, ya sea natural o jurídica. Así lo ha razonado la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N°3.354-03. Agrega que además es necesario para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan la presente demanda, resulta necesario remitirse al Capítulo I de la Constitución Política de La República, donde se desarrollan principios



Foja: 1

basales desde donde se erige todo el sistema institucional del Estado. Indica que en este sentido el inciso 4° del artículo primero y el inciso segundo del artículo quinto, resumen en forma completa la doctrina del constitucionalismo, es decir, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. Señala que esto, sumado a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, respectivamente, conforme al denominado estatuto de la responsabilidad extra contractual del Estado. Responsabilidad que como se evidencia, emana de la naturaleza misma del ente estatal como persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

Ahora, en la esfera de la responsabilidad estatal en el derecho internacional, explica que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones internacionales, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales del hombre” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y, entre otros, de los artículos 3.K, 16, 17, 32, 44, 45, 46 y 136 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Indica que este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ciertamente ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal y en materia de derechos humanos los estados tienen una obligación de resultado, esto es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

Señala que así la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce cuando el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. Así es una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o



Foja: 1

culpa en el accionar dañoso del Estado. Indica que responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto. Aduce que esta interpretación tiene una confirmación normativa encabezada del artículo 19 y 5 inciso segundo de la Constitución Política de La República.

Posteriormente se refiera a la improcedencia de la aplicación de las normas de derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, indicando que estos estatutos difieren en cuando a las premisas y principios diferentes a los que informan al derecho público y el derecho internacional de los derechos humanos, constituyendo un error lógico y de sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses. Expresa que entre los sistemas de responsabilidad existen evidentes diferencias que hacen inadecuado extender por vía de analogía ciertos conceptos del derecho civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos humanos, criterio que ha sido expuesto en este mismo sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en el mismo sentido ha fallado la Corte de Apelaciones de Santiago.

Continúa exponiendo que las razones para que se considerara insuficiente el derecho de daños del Código Civil chileno son las siguientes: 1.- Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, ya de entrada nos parece que el Título XXXV del Libro IV del Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado – cuestión, por cierto, inimaginable en los tiempos de Andrés Bello destinada a exterminar a un número importante de la población nacional sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del Art. 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste –“secuestro calificado”- el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y 2.- Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (Art.2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (Art.2321); edificios en ruinas (Art.2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (Art.2326 y Art. 2327). Demás está decir que la regla del Art. 2322 -sobre la



Foja: 1

relación entre amos y criados- es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad cuando han cometido crímenes de lesa humanidad, más aún es contraria al derecho internacional pues permite la exculpación estatal ante tan horrendos crímenes.

Siguiendo la línea del considerando precedente aduce que la acción de autos es imprescriptible por cuanto la presenta causa se encuentra gobernada por las normas de carácter público e internacional, lo que implica el reconocimiento de la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos. Explica que si bien ninguna disposición de la Convención Americana señala de modo expreso la imprescriptibilidad de las acciones civiles, por otra parte la falta de regulación jurídica expresa le impone al juez la tarea de interpretar, o más bien, integrar la normativa existente con los correspondientes principios generales del derecho que, en el caso concreto, orientan al Derecho Administrativo y en especial al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se establece en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia.

Expresa que por lo anterior resulta imposible abstraerse del hecho de que toda violación a un derecho humano al interior del sistema interamericano trae aparejada la obligación de reparar el mal causado. Por lo tanto el Estado de Chile, en su calidad de estado miembro del sistema interamericano la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derechos humanos de alguna persona tendría que ser la misma, esto es, reparar íntegramente el mal causado.

Indica que concordante con el razonamiento anterior, concluye que asimismo en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario el Art. 3 de Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (de 1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no



Foja: 1

ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. Señala que en este mismo orden de ideas nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre las cuales vale destacar la resolución A/RES/60/147, de 24 de octubre de 2005. Para finalizar expone que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en su 61º Periodo de Sesiones, aprobó el año 2005 el “Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Allí se lee –en el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción- que: “La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”

Luego procede a citar jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Posteriormente señala que se ha fallado reiteradamente por la Corte Suprema, para la determinación de la procedencia de la responsabilidad del Estado, no es necesario de acreditación del elemento subjetivo, pues dicho elemento no puede encontrarse en una persona sin sentimientos, como lo es el Estado.

En cuanto al daño, expone que actualmente no se puede negar la procedencia de la indemnización del daño moral en el marco de la responsabilidad, encontrándose aquella incluso su fundamento en la propia Carta Fundamental, específicamente en su artículo 6. Además al no excluir la constitución el daño moral salvo en el supuesto de expropiación de acuerdo al artículo 19 N°24.

Respecto a la causalidad explica que esta se encuentra fehacientemente acreditada, tanto así que el propio demandado ha reconocido la calidad de torturado de su representado, pues aparece en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura con el número 2828.

Continúa su demanda exponiendo que existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, rabia e



Foja: 1

impotencia ante la situación extremadamente violenta, injusto e ilegítima que vivió en carne propia. Explica que ha de entenderse por daño moral, aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Luego cita doctrina y jurisprudencia nacional que definen el daño moral en este mismo sentido. En cuanto a la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos -tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria- no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido, toda vez que (dicho padecimiento) “resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a tortura, agresiones y vejámenes (...) experimente dolores corporales y un profundo sufrimiento”

Manifiesta que aun así es difícil fijar un monto a fin de que logre hacer las veces de reparación integral del mal causado, porque es un daño verdaderamente irreparable al que como imaginará destruye la vida tanto en lo personal como en lo íntimo, en cuanto a sueños y esperanzas, así como en el dolor tanto físico como psicológico. No obstante ante la necesidad de fijar un monto, propone la cantidad de \$200.000.000.-.

En folio 7, rola notificación personal subsidiaria en conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, practicada a la demandada.

En folio 8, comparece Ernestina Ruth Israel López, abogada, en calidad de procuradora fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, contestando la demanda civil interpuesta en su contra, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasa a exponer.

Refiere a las reparaciones que se han hecho de acuerdo a la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en el sentido que tanto la Ley N° 19.234 como la Ley N° 19.992 han concedido a sus beneficiarios el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país el que se



Foja: 1

accede concurriendo la persona al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la oficina del PRAIS.

Añade que además del acceso gratuito a este tipo de prestaciones, el PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario, que atienden de forma exclusiva a los beneficiarios del programa. Asimismo adquieren los derechos establecidos para todos los usuarios de FONASA, además del derecho a organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de autoridad sanitaria crea, así como también se obtiene el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y la promoción del resto de los derechos humanos.

Arguye que además se les ofrece apoyo técnico y rehabilitación física con la finalidad de superar las lesiones físicas derivadas de la prisión política o tortura, así como también se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuación gratuita de los estudios básicos, medios o superiores, siendo el organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho, la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. A modo de ejemplo menciona el caso en que un hijo o nieto de un beneficiario, siempre y cuando este último no hubiera hecho uso de este derecho, puede postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Milla, Nuevo Milenio o las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que los reglamentos tengan para esas becas. Por último se entregaron beneficios en vivienda a través del acceso a subsidios.

Aduce que parte de estos procesos de justicia transicional también es importante la reparación del daño moral ocasionado a las víctimas de trasgresión a los derechos humanos, lo que se realiza por medio de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas trasgresiones. En este sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como la construcción de Memorial del Cementerio General en Santiago del año 1993, la fijación del día Nacional del Detenido Desaparecido, mediante el Decreto N° 121, que recae en el 30 de agosto de cada año, la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, establecimiento por Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos, y además de la construcción de distintos memoriales y obras a lo largo del país, así como también de obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, etc.





Foja: 1

Hace presente que hasta hoy el Estado ha hecho importantes esfuerzos con el fin de reparar a las víctimas de derechos humanos, cumpliendo con estándares internacionales de Justicia Transicional y entregando indemnizaciones acordes con la realidad económica del país, las que han compensado a dichas víctimas por los daños morales y patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los derechos humanos. Por lo anterior indica, que la indemnización solicitada en la demanda como el conjunto de reparaciones ya mencionadas, pretenden compensar los mismos daños ocasionados por idénticos hechos, por lo que no procede que sean reparados nuevamente. Cita jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha fallado bajo ese criterio, el que ha sido reiterado y ratificado en el tiempo.

Expresa que de acuerdo a lo anterior los órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado de forma positiva la política de reparación de violaciones de los Derechos Humanos implementada en el país, a tal extremo que ha rechazado otra forma de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya entregados por el Estado por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. Asimismo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha estimado que es beneficioso establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas con la finalidad de no provocar desigualdades.

Menciona el documento denominado Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos en el que se ha expresado los programas de reparación, reconociéndose en el mismo la existencia de la problemática de exigir indemnización vía de programas de reparación y en forma paralela, el ejercer una acción civil judicialmente.

A su vez sostiene que una vez que el gobierno ha hecho esfuerzo de buena fe en crear un sistema administrativo que facilite la entrega de beneficios a las víctimas, y permitir a los mismos iniciar litigios en su contra originaría el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño, además de poner en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que el segundo sistema no es fácilmente evitable, toda vez que los Tribunales podrían sobrepasar fácilmente los beneficios en relación a los entregados en un programa masivo, lo que podría generar una sensación de desilusión y un cambio de expectativas con los programas administrativos. En este mismo sentido, arguye que precisamente se busca el rechazo de nuevas peticiones de indemnización lo que conlleva a un fortalecimiento de los programas de justicia transicional, ya que de no ser así



Foja: 1

implicaría un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa referente a ello.

Concluye en que la acción deducida se funda en idénticos hechos pretendiéndose una indemnización por los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias, por lo que opone la excepción de reparación satisfactiva por ya haber sido indemnizados el demandante.

Opone además la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios de conformidad al artículo 2332 en relación al artículo 2497 del Código Civil, toda vez que de acuerdo a lo relatado por el actor fue detenido el 1 de mayo de 1979, siendo sometido a apremios ilegítimos y tortura en el marco del régimen dictatorial que regía en ese momento. A su vez y entendiendo que la prescripción se encontraba suspendida hasta la vuelta de la democracia, también la acción se encontraría prescrita por haber transcurrido en exceso el plazo contenido en la ley. A consecuencia de lo señalado, opone la excepción de prescripción correspondiente a 4 años prevista en el artículo 2332 del Código de Bello, solicitando acogerla y de este modo se rechace íntegramente la demanda intentada. En subsidio de lo anterior, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años, prevista en el artículo 2515 en relación al artículo 2514 del Código ya mencionado, toda vez que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la data de la notificación del presente libelo, ha transcurrido con creces el plazo dispuesto en la norma legal ya citada.

Explica las generalidades de la prescripción, señalando que la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre de un texto constitucional o legal expreso que así lo prevenga, lo que en este caso no existe. Asimismo indica que la prescripción es una institución universal y de orden público. Añade que en el Código Civil, en el Título XLII del Libro IV, se encuentran contenidas las normas que regulan dicha institución y en específico, en su artículo 2497 establece las normas de la prescripción en favor y en contra del Estado. Colige que la prescripción no exime de responsabilidad ni elimina el derecho a indemnizar, sino que solamente ordena y pone un límite necesario en el tiempo para que se deduzcan en juicio las acciones pertinentes, existiendo una armonía en las leyes que se rigen esta materia y que en este caso el demandante tuvo muchos años para ejercer dicha acción. Transcribe el extracto de una sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema la que ha declarado que las acciones civiles en estos casos se rigen por las normas del derecho común, toda vez que los tratados internacionales establecen la imprescriptibilidad respecto de las acciones penales, y no de las acciones civiles.



Foja: 1

Sostiene que la acción indemnizatoria no tiene un carácter sancionatorio, si no que su contenido es netamente patrimonial, y la cual persigue la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que debe aplicarse las normas de prescripción contenidas en el Código Civil. Agrega que, aun cuando el demandante funda la imprescriptibilidad de las acciones en Tratados Internacionales, lo cierto que en ellos tampoco se contempla esa institución en relación a las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad, o bien que prohíban o impidan la aplicación del derecho interno en esa materia. Describe la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Los Convenios de Ginebra, La resolución N° 3.074 de fecha 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, La Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que en ninguno de ellos se establece la imprescriptibilidad de las acciones civiles. Por lo latamente expuesto, solicita que se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

Manifiesta que en relación al daño e indemnización pedida, es difícil avaluar y apreciar de forma pecuniaria los daños no patrimoniales sufridos, toda vez que su contenido no es de índole económica, o al menos no directamente, atendido que la indemnización de perjuicio tiene como finalidad restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, entregando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, y con ello quede en el mismo estado previo al acto que le produjo daño. Por este motivo la indemnización del daño moral no se determina ponderando el valor de la pérdida o la lesión experimentada, sino solo otorgándosele a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita minimizar este daño o hacerlo más soportable, a través de una cantidad u otro medio. Indica que no existe una norma legal que regule lo anterior, por lo que se debe estar a los principios generales y básicos de la cuantificación correspondiente a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado. Señala que en este sentido la cifra solicitada por el actor es excesiva, teniendo en cuenta las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios que han fijados los Tribunales de Justicia, los que han sido fijados con mucha prudencia. Cita jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones y de la Excelentísima Corte Suprema que han resuelto bajo ese argumento.

Señala que en subsidio de anterior, su parte alega que respecto a la fijación del daño moral por los hechos relatados, en ellos se deben considerar todos los pagos recibidos durante todos estos años por el demandante de parte del Estado,



Foja: 1

conforme a las leyes ya mencionadas, las que además seguirá percibiendo a título de pensión, cuyo objetivo también es la reparación del daño moral. Añade que el no accederse a esta petición, involucraría un doble pago por el mismo hecho, lo que es contrario a los principios jurídicos básicos del derecho. Asimismo señala que debe tomarse en cuenta los montos establecidos en las sentencias dictadas por los Tribunales en esa materia.

Finaliza haciendo presente sobre la improcedencia del pago de reajustes e intereses, que los reajustes solo proceden una vez que se haya dictado la sentencia que acoja la demanda y ordene dicha obligación y que además la misma se encuentre firme y ejecutoriada, por esta razón, no existiendo sentencia dictada en autos su representado no tiene ninguna obligación de indemnizar y por tanto no existe suma alguna que reajustar, y además estos solo deben ser contabilizados una vez que se dicta la sentencia que los concede. Refiere que en atención a los intereses, el artículo 1551 del Código Civil insta de manera expresa que el deudor no se encuentra en mora mientras no haya sido reconvenido y haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

En folio 11, comparece el apoderado de la parte demandante, evacuando en tiempo y forma el trámite de réplica exponiendo que del examen de las defensas de su contraria se advierte que los hechos fundantes de la demanda no se cuestionan ni controvierten, tampoco se pone en entredicho el daño padecido tanto física como psicológicamente.

No obstante lo anterior realiza ciertas consideraciones a las excepciones de reparación integral y de prescripción, indicando en el caso de la primera que el deber de reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad, no se satisface con medidas genéricas dispuestas por el legislador, muy por el contrario las pensiones de reparación no son incompatibles con cualquier otra de cualquier, de que goce o pudiese corresponder al beneficiario, por lo que no es procedente considerar que ellas se otorgaron para reparar todo el daño moral sufrido por las víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos. Luego reitera que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6 inciso tercero de la Constitución Política de la República y 3° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del Consejo de Defensa del Estado quedarían inaplicadas. Por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si



Foja: 1

se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. Así las cosas, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

En la misma línea de lo anterior aduce que debe concluirse que los medios que voluntariamente el Estado ha dispuesto para reparar a las víctimas, no importan en forma alguna una renuncia o prohibición por parte de estas a la posibilidad de acceder a la sede jurisdiccional a fin que ésta, por los medios autorizados por la ley, declare la procedencia de reparación por daño moral. Así los beneficios otorgados por la Ley N° 19.992 y Ley N° 20874, no pueden desplazar a la indemnización del daño moral sufrido por el actor, lo que se desprende tanto de la historia de la ley como a las características de los beneficios por ella otorgada, que no constituyen una compensación integral de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, sino solo parte de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan suspendidos a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Luego respecto de excepción de prescripción extintiva, indica que si bien existió un debate dogmático al respecto, sin embargo este debate se ha decantado en los últimos años en favor de la imprescriptibilidad de las acciones que emanan de crímenes de lesa humanidad. Explica que la defensa fiscal intenta aplicar las normas del título XXXV del Libro IV del Código Civil y las reglas referidas a la prescripción extintiva resulta absolutamente impertinente, además de mostrar que el Estado chileno actúa con un doble rasero, afirmando urbi et orbi que las acciones reparatorias son imprescriptibles, y por otro lado, afirmando a nivel doméstico la vigencia de reglas pretéritas y no pensadas para crímenes de Derecho internacional; siendo indiscutible la existencia de responsabilidad del Estado, por hechos gravísimos que ninguna persona tiene obligación soportar. En un Estado de constitucional de Derecho el principio de responsabilidad es parte de la esencia del mismo. Expone que igualmente la jurisprudencia nacional ha compartido el criterio de la imprescriptibilidad las acciones civiles o reparatorias



Foja: 1

que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los Derechos Humanos, concediendo así la correspondiente indemnización, lo cual es hoy un hecho público y notorio que puede verse semanalmente en la sección de noticias del sitio web del Poder Judicial.

Respecto a los montos demandados, indica que las normas procesales vigentes exigen que en la demanda se presenten peticiones concretas, que en este caso si bien resulta difícil avaluar atendido a que no hay cantidad alguna de dinero que pueda suplir el dolor que experimento el actor, se ve obligado a avaluar, independientemente que queda en manos del Tribunal determinar conforme a derecho y al mérito de autos. En cuanto a la reajustabilidad, indica que esta se encuentra ligada con la reparación integral o plena, y del pago efectivo de las obligaciones. La desvalorización monetaria es algo que afecta a cualquier tipo de indemnización, por lo cual, es necesario acudir a un índice de reajustabilidad como es el Índice de Precios del Consumidor (IPC).

En folio 13, comparece la demandada evacuando el trámite de dúplica mediante la cual ratifica todas las argumentaciones expuestas en la contestación, las que da por reproducidas, solicitando el rechazo de la acción deducida.

Reitera que en lo tocante a la excepción de reparación satisfactiva respecto al daño moral, este ya ha sido indemnizado, por lo que es procedente lo alegado atendido que el Estado de Chile ha empleado un enorme esfuerzo para reparar el daño producido a las víctimas, ya sea a través de transferencias de dineros, reparaciones simbólicas, etc.

Respecto de la prescripción de la acción deducida, insiste en la importancia de la sentencia que unificó la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, la que se transcribo en sus principales argumentos en el escrito de contestación, y la que concluye que las acciones de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe en 4 años contados de la ocurrencia de los hechos, según lo previsto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación al artículo 2497 del mismo cuerpo legal ya citado, agregando que la misma ha estimado que los tratados internacionales de derechos humanos no impiden la aplicación del derecho interno, y en específico a lo expresado sobre la prescripción de la acción civil. Alude a jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema que ha resultado bajo ese argumento.

En folio 14, se recibió la causa a prueba fijándose los puntos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales esta habría de recaer, rindiéndose la que obra en autos.



Foja: 1

En folio 28, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio N°1, comparecen don Nicolás Alberto Leal Sepúlveda y don Eduardo Armando García Ramos, abogados, domiciliados en calle Bandera N°236 subterráneo, comuna de Santiago, en representación judicial de José Miguel Barrios Vásquez, quien deduce demanda en juicio ordinario de responsabilidad extracontractual con indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, todos ya individualizados, solicitando tenerla por interpuesta, acogiéndola a tramitación y en definitiva que se le condene al demandado al pago de \$200.000.000, a favor del demandante, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta su pago efectivo y total de estas, o la suma que el Tribunal determine, con costas.

Funda su demanda, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron expuestos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan expresamente por reproducidos para todos los efectos legales.

**SEGUNDO:** Que a folio N° 8, comparece doña Ernestina Ruth Israel López, en representación del Fisco de Chile, quien estando dentro de plazo legal contesta la demanda civil interpuesta, solicitando su rechazo en atención a las excepciones y defensas que pasó a exponer.

Argumenta su defensa, en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron esgrimidos en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan íntegramente por reproducidos para todos los efectos legales.

**TERCERO:** Que a folio N° 11, comparece la parte demandante, evacuando dentro de plazo legal la réplica, mediante la cual reitera íntegramente lo expuesto en la demanda, y agregando además otras argumentaciones.

Fundamenta su réplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron presentados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por absolutamente reproducidos para todos los efectos legales.

**CUARTO:** Que a folio N° 13, comparece la parte demandada, quien estando dentro de plazo legal, evacúa la dúplica, ratificando todas las argumentaciones efectuadas en la contestación.

Basa su dúplica en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que ya fueron enunciados en la parte expositiva de la presente sentencia, los que se dan por totalmente por reproducidos para todos los efectos legales.



Foja: 1

**QUINTO:** Que, en el folio N°14, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales iba a versar, los siguientes:

1.- Efectividad que el actor hubiera sufrido detención, prisión ilegal, torturas físicas y psicológicas y apremios ilegítimos ejercidos por parte de la demandada o sus dependientes. Hechos, circunstancias y época.

2.- De ser efectivo el punto anterior, si dicha conducta constituye una acción u omisión ilícita cometida con culpa o dolo por parte de la demandada o sus dependientes. Hechos y circunstancias.

3.- Relación de causalidad entre la acción u omisión culpable o dolosa y el daño producido.

4.- Existencia de daños y perjuicios, sufridos por el demandante. Naturaleza, especie y monto de los mismos.

5.- Efectividad de haber obtenido la parte demandante reparación de los supuestos perjuicios cuya indemnización ha demandado, en la afirmativa, naturaleza, época y monto de los pagos efectuados.

6.- Concurrencia de los elementos de hecho y antecedentes constitutivos de la prescripción extintiva de la acción alegada y de su interrupción en su caso.

**SEXTO:** Que los actores generaron la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario en orden a acreditar los fundamentos de sus pretensiones:

**En folio 1:**

1.- Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, en la que don José Miguel Barrios Vásquez figura bajo el número 2.828.

**En folio 15:**

2.- Copia de norma técnica para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973-1990.-.

3.- Copia autorizada de antecedentes de carpeta de don José Miguel Barrios Vásquez del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

En este documento el señor Barrios Vásquez relata haber sido detenido por Carabineros el 1 de mayo de 1980 situación en la que se mantuvo hasta el día 6 del mismo mes y año, posteriormente desde ese mismo día fue relegado en la Laguna de Maitencillo donde estuvo hasta el 7 de agosto de 1980





Foja: 1

Relata que durante su detención/relegación no sufrió torturas propiamente tal, pero si fue golpeado brutalmente con pies, puños y la culata de las armas de los militares. También relata que caminaban sobre el mientras permanecía tendido en el suelo, boca abajo, lo que se extendió por varias horas. Asimismo lo patearon en la cabeza, se paraban sobre el con todo el peso del cuerpo sobre sus tobillos. Indica haber recibido golpes de culata en el abdomen, lo que le provocó intenso dolor en las costillas. Nunca se constataron sus lesiones, que probablemente se identificaban con costillas quebradas, si no que únicamente un hombre que decía ser médico le dijo que no tenía nada.

4.- Informe psicológico (confidencial) respecto de José Miguel Barrios Vásquez, elaborado por la psicóloga Massiel Nicole Cerna Cuevas.

En este informe la profesional concluye que el actor se encuentra atravesando por síntomas asociados a un Trastorno de estrés postraumático según Cie-10 en relación a la vulneración de sus derechos humanos fundamentales a contar del mes de mayo de 1980, donde fue detenido, violentado y torturado de diversas maneras. De igual manera indica que la experiencia de detención arbitraria y experiencias de torturas afectaron en modo fundamental la vida del señor Barrios Vásquez de su núcleo familiar, sufriendo daños adicionales a los físicos ya descritos, como trauma psicosocial, amedrentamiento, persecución, marginación individual y social.

5.- Copia de certificado de título de Massiel Nicole Cerna Cuevas, emitido por la Universidad de Concepción con fecha 16 de abril de 2021.

**En folio 16:**

6.- Sentencia de reemplazo pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema el 10 de junio de 2014 en autos rol N°5831-13.

7.- Sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema el 6 de enero de 2014, en autos rol N°2918-13.

8.- Sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema el 29 de diciembre de 2015, en autos rol N°22856-15.

9.- Sentencia de 29 de noviembre de 2018 caso órdenes guerra y otros vs. Chile, pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

10.- Sentencia pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema el 14 de septiembre de 2015, en autos rol N°1092-15.



Foja: 1

11.- Copia de informe de comisión nacional sobre prisión política y tortura.

12.- Copia informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura HUMILLACIONES Y VEJAMENES, págs. 239 a la 241, inclusive.

13.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura. GOLPIZAS REITERADAS, págs. 226 a la 228, inclusive.

14.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. LESIONES CORPORALES DELIBERADAS, págs. 229 a la 230, inclusive.

15.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. AMENAZAS, págs. 236 a la 237, inclusive.

16.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura PRESENCIAR TORTURAS DE OTROS, pág. 244 a la 245, inclusive.

17.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura PRIVACIONES DELIBERADAS DE MEDIOS DE VIDA, pág. 248.

18.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura PRIVACION O INTERRUPCION DEL SUEÑO, págs. 248 a la 249, inclusive.

19.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH) Capítulo V: Métodos de Tortura EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS EXTREMAS, págs. 250 a la 251, inclusive.

20.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura CONFINAMIENTO EN CONDICIONES INFRAHUMANAS, págs. 247 a la 248, inclusive.

21.- Copia de informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (VALECH). Capítulo V: Métodos de Tortura. POSICIONES FORZADAS, págs. 232 a la 233, inclusive.

**SÉPTIMO:** Que, la demandada únicamente solicitó al contestar la demanda se oficiara al Instituto de Previsión Social, a fin de que informara sobre todos los



Foja: 1

beneficios reparatorios del Estado percibidos por los actores, oficio que fue evacuado según consta en folio 17, con fecha 6 de octubre de 2022.

**I-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE REPARACIÓN INTEGRAL:**

**OCTAVO:** En primer término, corresponde resolver la alegación opuesta por la demandada, y que dice relación con la reparación integral de los actores destinados a enervar la acción indemnizatoria por daño moral pretendida, fundada en los beneficios de los que han recibido los demandantes conforme a las leyes 19.123, 19.992 y 20.874.

Ha acompañado como antecedente el documento refrendado en el considerando precedente, en el que consta que los demandantes han recibido las prestaciones que se indican.

**NOVENO:** Que, en el contexto político vivido a nivel nacional entre los años 1973 y 1990, el artículo 1 de la Ley N°19.123 dispone la creación de la *“Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago”*.

*Su objeto será la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por decreto supremo N° 355, de 25 de abril de 1990, y las demás funciones señaladas en la presente ley”*.

En ese sentido, una de las finalidades de la aludida Corporación, conforme al numeral 1 del artículo 2 de la citada ley consiste en *“Promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18 y otorgar la asistencia social y legal que requieran los familiares de éstas para acceder a los beneficios contemplados en esta ley”*, recayendo en las personas consideradas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

En refuerzo de esta normativa, el artículo 1 de la Ley N°19.992, concede una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.



Foja: 1

En el mismo orden de cosas, la Ley N°20.874 concede a dichas personas un beneficio económico único, tal como dispone su artículo 1°.

**DÉCIMO:** Respecto de la defensa en estudio, no desconoce este sentenciador los esfuerzos y la implementación de políticas de Estado vigentes hasta hoy en miras a perseguir la reparación del daño causado por agentes de Estado en el contexto del régimen vigente entre 1973 y 1990, recogidos a través de los informes de la Comisión de Prisión Política y Tortura, que refrendan e incorporan a las víctimas de violaciones a los llamados Derechos Humanos, cuya dimensión político-social, precisamente, apuntaba a la reparación y fortalecimiento de las instituciones democráticas y la consolidación de la responsabilidad del Estado frente a estas acciones, lo que también se ha traducido en las diversas persecuciones penales aún vigentes hasta el día de hoy.

En este escenario, es claro que la Ley N°19.123 y las que se han dictado posteriormente han concedido una serie de beneficios, entre ellos los directamente pecuniarios, tanto en materia de salud como otros de carácter simbólico, los que se enmarcan dentro de las finalidades de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, según su artículo 2 antes aludido, destinadas a “promover la reparación moral “de las víctimas.

Sin embargo, el hecho que estas prestaciones se hayan fijado por ley en beneficio de las aludidas víctimas gira en torno al concepto de reparación en todas sus dimensiones y, precisamente, dentro de la finalidad que se anota en el párrafo precedente, esto es, la reparación moral, hecho que no supone impedir el ejercicio de acciones civiles contra el Estado por parte del actor.

No consta que las prestaciones otorgadas supongan una renuncia a la acción civil indemnizatoria que por este acto se ejercen, lo que permite colegir, en principio, que la excepción reclamada por la demandada es improcedente.

A mayor abundamiento, las diversas prestaciones reconocidas a nivel legal no apuntan necesariamente a resarcir la dimensión moral del sujeto, sino también el ámbito estrictamente patrimonial y recuperar la pérdida de chances causadas por los actos de agentes estatales (lucro cesante), los que también se ven dirigidos a sus parientes, tales como los referidos al ámbito educacional y en materia de salud.

**UNDECIMO:** En definitiva, este sentenciador rechazará la excepción en estudio conforme al razonamiento precedente.

## **II-EN CUANTO A LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XQXXKRLRSE

Foja: 1

**DUODÉCIMO:** De manera subsidiaria a la excepción antes descrita, la parte demandada opuso la de prescripción extintiva de la acción civil, sea en los términos dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, o bien conforme al artículo 2515 del mismo cuerpo legal, en consideración a la data de los hechos que sirven de sustento de la acción en relación con la interposición y posterior notificación de la demanda.

**DÉCIMOTERCERO:** En relación con esta materia, la institución de la prescripción, en los términos del artículo 2492 del Código Civil, que precisamente se encuentra destinada a la consolidación de la “seguridad de las posesiones y del crédito”, tal como indica el mensaje de dicho cuerpo normativo.

En relación con esta premisa, el artículo 2493 del mismo cuerpo legal es claro en señalar que *“El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”* y que el artículo 2497 establece que *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Respecto a esta materia, conforme a la responsabilidad civil extracontractual que se reclama, el artículo 2332 del Código Civil establece que *“Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto”*.

**DECIMOCUARTO:** Es un hecho de la causa –y que al menos no aparece controvertido por la demandada-, que el demandante sufrió detención, prisión y relegación por parte de agentes del Estado en el año 1980, siendo liberados tiempo después, en el contexto político vigente en la época.

Al respecto, es necesario destacar el concepto de delito de lesa humanidad que se encuentra regulado en la Ley N°20.357, que en su artículo 1° indica que *“Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurren las siguientes circunstancias:*

*2°. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detentan un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos”*.



Foja: 1

El mismo articulado, luego de referirse a los delitos de lesa humanidad, al genocidio y crímenes de guerra, dispone en el artículo 40 que *“La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”*.

En relación con lo expuesto, de los antecedentes acompañados en folios 1, 15 y 16, se describe y se desprende que los delitos cometidos 1980 respecto del demandante obedecieron a razones de índole política y que se encuentran vinculados a actos del Estado, en la forma que en dichos documentos se consignan latamente.

**DECIMOQUINTO:** En este análisis, y por aplicación del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, se desprende que rige, dentro de ese estándar normativo, lo dispuesto en artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el que ha sido ratificado por el Estado Chileno y se encuentra actualmente vigente, que dispone al efecto que *“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada”*

Sobre el particular, y en diversas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido enfática en establecer, por una parte, que *“que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo”*, mientras que *“la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral”* (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia “Velásquez Rodríguez vs Honduras”, dictada con fecha 21 de julio de 1989, párrafos 25 y 26. Consultado en <https://summa.cejil.org/es/entity/i0qbrq3n93utmx6r?page=9>; fecha de consulta 28.04.2022)

**DECIMOSEXTO:** Todo este razonamiento que se viene sosteniendo hasta acá permite llevar a la conclusión que, en primer término, en materia de Derecho



Foja: 1

Internacional, y reconocido a nivel interno, los llamados delitos de lesa humanidad gozan de la imprescriptibilidad de la acción penal.

En segundo lugar, sobre la base de la vulneración de los derechos que esas acciones lesivas han causado sobre sectores de la población, los estatutos internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, conceden un derecho a reparación integral, lo que no sólo permite el derecho al recurso y a la acción judicial, sino al resarcimiento de todo perjuicio patrimonial ocasionado y del que se requiera efectiva reparación.

En este aspecto, lo refrendado en el considerando anterior deja en evidencia que, frente a las dificultades en la persecución de estos hechos y la satisfacción del derecho a la “reparación integral”, resulta contraproducente entonces aplicar un estatuto de prescripción extintiva a hechos de esta naturaleza, por cuanto se oponen al ordenamiento internacional frente a esta prerrogativa de reparación integral, que resulta predominante por sobre la consolidación de las relaciones jurídicas en base al mero transcurso del tiempo. De lo contrario, se vulneraría precisamente aquel derecho antes citado, por lo que debe necesariamente la acción civil derivada de estos hechos compartir la misma imprescriptibilidad que la acción penal.

No es obstáculo, a juicio de este sentenciador, que los tratados y la normativa internacional aplicadas en esta litis sean posteriores en cuanto a su vigencia al ordenamiento interno, pues los primeros predominan en su aplicación al referirse a derechos inherentes a la naturaleza humana y, por ende, reconocidos dentro del contexto internacional, dado su interés público, los que tiene como base principios de índole superior y que buscan la protección de los derechos más esenciales de cada ser humano.

Además, las normas de prescripción rigen esencialmente para relaciones entre privados y, en el caso de aplicarse en los términos del artículo 2497 del Código Civil, dicen relación con toda cuestión contractual y patrimonial en las que predomina el interés privado en las relaciones con el Estado y sus órganos.

Disponer su aplicación por sobre los tratados internacionales, además, colisiona con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al prescribir precisamente que *“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”*.



Foja: 1

Este es un tema que, por cierto, ha sido reconocido ya por la Excm. Corte Suprema en diversas sentencias dictadas por la materia (Rol N°8318-2018; Rol N°29944-2019; Rol N°29.617-2019; Rol N°79.259-2020, entre otras).

**DECIMOSÉPTIMO:** Por tanto, en relación con la alegación formulada por la demandada en análisis, tanto en su fundamento principal como subsidiario, deberá ser rechazada al estimar que la acción indemnizatoria en este tipo de materias es imprescriptible atendidos los fundamentos esgrimidos precedentemente.

### **III-EN CUANTO AL FONDO:**

**DÉCIMOCTAVO:** Que la acción deducida por el demandante en el folio 1 de estos antecedentes buscan resarcir el perjuicio moral que le han causado los agentes del Estado, reconocidos en el Informe respectivo, habiendo sido sujeto a detenciones y relegación por parte de agentes del Estado en 1980.

De estos hechos, reclaman el resarcimiento de las consecuencias que de ello derivaron en su esfera personal.

**DÉCIMONOVENO:** Que es un hecho de la causa que la parte demandada no ha controvertido la ocurrencia de los hechos denunciados, ni su connotación ni el contexto en que se promovieron aquellos, máxime si han sido considerados los hechos en que se sustenta la acción como parte de los cometidos por agentes del estado en contexto de la violación a los Derechos Humanos, de acuerdo a los informes acompañados a los autos en folios 1, 15 y 16, los que no fueron objetados de contrario.

Sin embargo, la demandada hace presente que el daño moral pretendido a base de esos hechos no se cuantifica a partir de un aspecto económico en particular, por lo que entiende que lo solicitado es excesivo, teniendo en consideración todas las acciones que el Estado ha llevado a cabo a fin de obtener la aludida indemnización y, en subsidio de esa alegación, la regulación debe considerar los pagos ya recibidos y efectuados por el Estado, en armonía con los montos establecidos por los tribunales, los que ha recibido el actor durante años y que seguirán percibiendo con posterioridad.

**VIGÉSIMO:** En esta materia, junto con reiterar las normas citadas con anterioridad respecto al derecho de reparación integral que contempla el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2314 del Código Civil señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*, a lo que el artículo 2329 del mismo





Foja: 1

cuerpo legal, en su inciso primero, dispone que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”*.

Se ha reconocido que, dentro de la clasificación del daño, atendida su naturaleza, se encuentra el llamado daño moral, que contempla la aflicción, el daño en los sentimientos e integridad espiritual de una persona, que no forman parte del aspecto patrimonial propiamente tal, y que de alguna forma se busca resarcir mediante la indemnización de perjuicios requerida.

Como perjuicio que es, debe ser probado precisamente por quien lo alega, conforme al artículo 1698 del Código Civil.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en este aspecto y teniendo en consideración la prueba y los antecedentes ya refrendados se debe concluir que el actor fue víctima de prisión política y tortura, como consta en el Nómina de presos políticos y torturados Comisión Valech 1, respecto del actor, rolante en folio 1 de marras. Asimismo se ha acreditado que el señor José Barrios Vásquez fue detenido teniendo 22 años de edad por Carabineros el día 1 de mayo de 1980 siendo liberado el día 6 del mismo mes y año. Posteriormente el mismo 6 de mayo de 1980 sería relegado a La Laguna de Maintencillo, en donde estuvo por 90 días. El actor fue golpeado con puños, pies y culatazos durante todo el tiempo que duro su detención. Asimismo lo tendían en el suelo boca abajo y caminaban sobre él, pisándolo muy fuerte. Lo anterior le generó fuertes dolores en las costillas.

En lo que respecta a los daños sufridos, de acuerdo al informe psicológico acompañado en folio 15, única probanza idónea para poder avaluar el daño sufrido por el actor, este sufre actualmente de síntomas identificables con un Trastorno de estrés postraumático que afectó su vida de forma fundamental, así como a su núcleo familiar.

**VIGESIMO SEGUNDO:** Así las cosas, este sentenciador estima, de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, que el demandante ha acreditado que fue víctima de prisión política y tortura, lo que le ocasionó perjuicios morales pues afectó su dimensión espiritual y física en la forma descrita anteriormente.

Si bien es dable presumir que una consecuencia lógica de una experiencia traumática como la que el demandante explica en su demanda consiste precisamente en un daño moral de tal entidad que provocó de manera indiscutible un cambio en el desarrollo personal y que permanece en su espiritualidad hasta el



Foja: 1

día de hoy, como todo perjuicio se requiere prueba para sostener, con precisión, la forma en que ese daño moral no solamente existe, sino que también cómo se ha manifestado o repercutido en los afectados, esto es, su intensidad, de tal manera que ello influirá en el quantum indemnizatorio a fijar.

En este acápite del razonamiento sobre el daño causado, es importante precisar que los antecedentes acompañados con la presentación de folio 15, constituyen prueba idónea para pronunciarse sobre la existencia del daño y el quantum indemnizatorio por el que se debería acoger la acción deducida.

Dichos antecedentes señalados precedentemente y latamente analizados en el considerando sexto de esta sentencia, permiten dar un parámetro a este sentenciador dentro del cual determinar el monto indemnizatorio a conceder a la parte demandante, que de suyo es complejo al valorizar y poder reflejar la intensidad del padecimiento sufrido por ésta frente a los hechos ilícitos ocurridos en el contexto de actuaciones de agentes estatales ocurrido en los periodos ya señalados. No obstante lo anterior se advierte que el monto indemnizatorio que se fijará en los considerandos siguientes podría haber sido superior de existir prueba fehaciente, contundente y específica respecto de los daños que en el actor generó la relegación de la cual fue víctima desde el 6 de mayo al 7 de agosto de 1980.

**VIGÉSIMO TERCERO:** De acuerdo al razonamiento anterior, este sentenciador estima, dada la magnitud de los hechos sufridos por éstos y las secuelas adquiridas a consecuencia de dicha detención, el perjuicio moral causado se fijará prudencialmente en la suma que se indica a continuación, donde influirá tanto la edad en la que sufrió este hecho, el tiempo que permaneció privado de libertad; los maltratos ocasionados a raíz de ello y a relegación a la que fue sometido a consecuencia de dicha detención, además de la forma como se generó una ruptura en el estilo de vida; los padecimientos sufridos y las secuelas que han sido permanentes en su estilo de vida.

De este modo, se colige que en relación con el perjuicio moral ocasionado al demandante, se estima que debe ser resarcido con la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos).

**VIGÉSIMO CUARTO:** Respecto a la alegación de la demandada a fin de considerar los beneficios que la actora actualmente recibe y que fueron acreditados en autos para los efectos de fijar la indemnización que se concede, se rechazará por los mismos motivos consignados al desechar la excepción de reparación integral, en circunstancias que su argumento plantea, en cierto modo, el mismo efecto que se tuvo en consideración al esgrimir que la parte demandante



Foja: 1

habría sido resarcida de los perjuicios sufridos con las prestaciones legales concedidas en su favor y que actualmente percibe.

**VIGÉSIMO QUINTO:** En cuanto al reajuste e interés solicitado, será acogido sólo en cuanto se concederá el aludido reajuste de la suma fijada a título de indemnización conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a aquel en que quede ejecutoriada esta sentencia hasta el mes anterior al del pago efectivo y, a su vez, generará intereses corrientes, todo ello contado desde que esta sentencia se encuentre ejecutoriada hasta su pago efectivo.

**VIGÉSIMO SEXTO:** En cuanto a la condena en costas solicitada, no se accederá a la imposición de dicha carga procesal en circunstancias que la demandada no fue totalmente vencida y que, en todo caso, estima que ha litigado con fundamento plausible en el proceso.

**VIGESIMO SÉPTIMO:** Finalmente, el resto de la prueba acompañada al proceso por la demandante que no fuere analizados mayormente en el considerando sexto de este fallo, no gozan del mérito suficiente como para alterar lo resuelto precedentemente, al tratarse de antecedentes que no proporcionan otros hechos a considerar al momento de resolver.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1698, 2314, 2329, 2332 y 2514, todos ellos del Código Civil, 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 27 de la Convención de Ginebra sobre Derecho de Los Tratados y 170 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I-. Se rechaza** la excepción de reparación integral alegada por la demandada.

**II-. Se rechaza** la excepción de prescripción extintiva conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos duodécimo a decimoséptimo de esta sentencia.

**III-. Se acoge** la demanda interpuesta en el folio 1 de estos antecedentes, sólo en cuanto condena a la parte demandada al pago de la suma de **\$30.000.000.-(treinta millones de pesos)** a título de indemnización por daño moral en favor del actor José Miguel Barrios Vásquez.



Foja: 1

Dicha suma deberá pagarse debidamente reajustadas y con los intereses respectivos de acuerdo a lo señalado en el considerando vigésimo cuarto de esta sentencia;

**IV-. Que no se condena** en costas a la demandada por no haber sido totalmente vencida y por haber litigado con motivo plausible.

**Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.**

**Dictada por don Gastón Villagra Santander, juez titular del Décimo Juzgado Civil de Santiago.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, siete de Diciembre de dos mil veintitrés**

